

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2022019674-018-000

Fecha: 2022-06-16 15:28 Sec.día 2118

Anexos: No

Trámite: 125-ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO SANCIONATORIO

Tipo doc: 80-RESOLUCIONES

Remitente: 540000- DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Destinatario: 401 - 47-COMFINAGRO S.A.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0701 DE 2022

(15 de junio)

Por la cual se impone una sanción

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren los artículos 49 y 50 - literales s) y x)-, así como los artículos 51 a 55 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.29 del Decreto 2555 de 2010 y conforme a régimen especial de carácter sancionatorio contemplado en el numeral 4 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que la sociedad Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A. (en adelante Comfinagro, o la Entidad Vigilada) con NIT 805023598-1 se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010.

SEGUNDO. - Que mediante Oficio radicado con el No. 2021131060-013 del 20 de diciembre de 2021, la SFC le formuló Pliego de Cargos de carácter institucional a Comfinagro, por hechos que al parecer eran constitutivos de infracciones a las disposiciones en materia de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, establecidas en la Parte Primera, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica (en adelante Capítulo SARLAFT), vigente para el momento de los hechos.

TERCERO. - Que en el Oficio de Pliego de Cargos se le concedió a Comfinagro un plazo de treinta (30) días hábiles para rendir explicaciones por los hechos y razones de derecho que allí se expusieron, de conformidad con lo dispuesto por el literal h) del numeral 4° del artículo 208 del EOSF.

CUARTO. - Que estando dentro del término legal, mediante comunicación radicada con el No. 2022019674-000 del 31 de enero de 2022, el representante legal de Comfinagro presentó las explicaciones institucionales respectivas y solicitó incorporar a la presente actuación administrativa unas pruebas documentales allegadas con el radicado referido y adicionalmente solicitó que se decretara y practicara otra.

QUINTO. - Que mediante Auto No 001 radicado con el No. 2022019674-003 del 1° de marzo de 2022, el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, decidió

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

sobre la procedencia de unas pruebas dentro de la actuación administrativa adelantada a Comfinagro. De una parte, ordenó que se incorporaran las pruebas documentales allegadas por la Entidad Vigilada en el escrito de explicaciones, y de otra, decretó la práctica de la prueba allí descrita, solicitada por la misma entidad al Grupo de Autorizaciones de la SFC.

SEXTO. - Que mediante Auto No. 002 del 20 de mayo de 2022, se decretó el cierre de la etapa probatoria y se dio traslado a Comfinagro, para que presentara sus alegatos de conclusión.

SÉPTIMO. - Que, dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación del acto administrativo citado en precedencia (oficio No. 2022019674-013-000 del 23 de mayo de 2022), la Entidad Vigilada presentó alegatos de conclusión, mediante comunicación No. 2022117965-000 del 7 de junio de 2022.

OCTAVO. - Que de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 4 del artículo 208 del EOSF, una vez agotada la etapa probatoria y vencido el término de traslado para alegar, es procedente adoptar una decisión de fondo dentro del curso de la presente actuación administrativa.

NOVENO. - Que reseñados de esta forma los antecedentes referidos y con el fin de analizar los argumentos expuestos en su defensa por parte de Comfinagro, la SFC se pronuncia de fondo sobre los descargos y los alegatos de conclusión, en el orden en que fueron presentados, así:

9.1 CARGO FORMULADO A COMFINAGRO

La SFC mediante oficio radicado con el No.2021131060-013 del 20 de diciembre de 2021, formuló un cargo único a Comfinagro, por *“NO CONTAR CON OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE DEBIDAMENTE POSESIONADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA”*

En efecto se pudo establecer que la Entidad Vigilada, no tenía un Oficial de Cumplimiento Suplente debidamente posesionado, durante más 23 meses, periodo que se determina para efectos de la cronología de la conducta sancionable desde la renuncia del funcionario que tenía a cargo dicho rol (3 de enero de 2020) hasta la fecha de la formulación de cargos, lo cual demostraría una desatención de los deberes mínimos y taxativos previstos dentro del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

En consecuencia, en dicho Oficio se le indicó que su conducta omisiva desconocería el deber establecido en el numeral 3° del artículo 102 del EOSF, en concordancia con el subnumeral 4.2.4.3.1.9 de la Circular Externa 027 de 2020, así como lo exigido en el subnumeral 1.5.1 del Capítulo II, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, vigentes para la época de los hechos.

9.2 ARGUMENTOS DE DESCARGOS PRESENTADOS POR COMFINAGRO

La Entidad Vigilada sostiene en su defensa que, en aras de la observancia de sus deberes en materia de SARLAFT, designó como posible candidato a ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente al señor RM¹, quien adelantó para el efecto, un proceso de capacitación en materia de riesgos, cursando el Diplomado en SARLAFT (Gestión del Riesgo de Lavado de Activos – Formación Oficial de Cumplimiento) en la Universidad del Valle, el cual, por efecto de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, tuvo retrasos significativos y diversos inconvenientes para su finalización y certificación, aunado al hecho de que la nómina total de Comfinagro, para ese entonces, no superaba las doce personas, y que la oferta de capacitación sobre administración de riesgos no había sido especialmente prolija.

¹ A lo largo del presente acto administrativo se edita el nombre de la persona natural dejando las iniciales con el fin de proteger sus datos personales de conformidad con la Constitución Nacional y la Ley.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Así mismo, manifestó en el escrito de descargos que, en los comités de auditoría de noviembre de 2020 y febrero de 2021, se efectuó seguimiento sobre la falta de dicho posesión aspecto que fue informando a la administración, realizando la salvedad de que, en ese momento, la oferta de capacitación existente para dar cumplimiento a lo exigido por las normas no permitiría cumplir con el mínimo de horas requeridas para la acreditación sobre riesgos.

Afirma que el Pliego de Cargos indica además una posible negligencia por parte de Comfinagro, imputación de la cual difieren, pues, reiteran que cumplir con los requisitos objetivos básicos, es de difícil consecución en una nómina tan reducida, e insiste en expresar que la SFC insta a que la Entidad Vigilada sea la que en primera instancia evalúe el cumplimiento de requisitos objetivos y subjetivos del candidato al cargo, antes de su postulación, lo cual les permite su aprobación por parte del Comité de Posesiones.

Frente a lo anterior, consideran que no corresponde a la Entidad Vigilada atribuirse tal facultad, pues en su sentir el análisis subjetivo al que alude la SFC, comporta un análisis personal, individual que recae en este caso en el Comité de Posesiones, que redundaría en su concepto en una aprobación o desaprobación del perfil del candidato que ha sido postulado al respectivo cargo.

Sostiene además que a su juicio, el último postulado por Comfinagro, el señor RM, refleja en su hoja de vida amplia experiencia profesional en materia de auditoría y riesgos, que por su vínculo contractual y funcional se encuentra alejado de áreas de control así como del desarrollo del objeto social de la Entidad Vigilada, esto es, la celebración de contratos de comisión y corretaje a través de las bolsas de productos legalmente constituidas en Colombia. Con ello, presuponen que el elemento objetivo estaría superado satisfactoriamente.

De otra parte, argumentan que, surtido el trámite de solicitud ante el Comité de Posesiones, esta instancia, tanto en la decisión inicial, como en la resolución del recurso de reposición interpuesto, señaló que el candidato no habría superado el análisis subjetivo de la SFC, sin que se ahondara en la respectiva explicación, más allá de establecer con claridad que dicho análisis hace parte de las facultades de la Entidad Vigilada, de forma discrecional. Menciona que, si bien es absolutamente comprensible y en esencia legítimo, en razón del carácter público del mercado que vigila, en su concepto no se compadece con la exigencia que el Pliego de Cargos efectúa de que sea la misma la que postule candidatos que cumplan con los requisitos subjetivos. Por lo tanto, sostienen que no es posible, para Comfinagro ni para ninguna otra entidad, anticipar el tipo de análisis subjetivo que adelanta el citado Comité de Posesiones, por lo que no es de recibo que la no satisfacción de tal análisis se convierta en un incumplimiento de los postulantes.

Así mismo, sobre el proceso del señor RM, expone que no resulta comprensible que se señale que, además de la subjetividad, el candidato podría incurrir en eventuales conflictos de interés, sin desarrollar tampoco dicha hipótesis. Sobre este aspecto enuncia que no ha entendido cómo, siendo el candidato postulado responsable de un proceso como el contable, se insinúe un conflicto eventual en materia de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En efecto, expresa que a la fecha Comfinagro no cuenta con Oficial de Cumplimiento Suplente, no por negligencia, sino por los ya aludidos contratiempos.

En ese orden de ideas, determina que la visible dificultad para encontrar las calidades requeridas en un solo candidato se incrementa en función de los criterios subjetivos de la SFC, de imposible anticipación por parte de la Entidad Vigilada, y que, de no coincidir, no puede derivarse de ello negligencia, sino la lectura natural y obvia, y es la no coincidencia de criterios entre la Entidad Vigilada y la SFC, lo cual resulta plausible en este tipo de procedimientos.

Concluye finalmente que, acogiendo lo dispuesto en el literal i) del numeral 2º del artículo 208 del EOSF, Comfinagro reconoce expresamente la configuración de la conducta consistente en la no posesión de oficial de cumplimiento suplente; solicita respetuosamente valorar lo aducido, así como

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

las medidas adoptadas en aras de subsanar la vacancia y gradúe la sanción, atenuándola, amparada entre otros elementos, en que no se ha producido daño alguno.

Así mismo, adjuntó como pruebas las siguientes:

1. Captura de pantalla de inicio de trámite, bajo radicación N° 2022019519-000-000, de enero 31 de 2022, correspondiente a la postulación del señor RM como oficial de cumplimiento suplente, conforme a su ratificación en sesión de Junta Directiva del pasado 20 de enero de los corrientes.
2. Extracto de acta de la sesión de la Junta Directiva N°. 261, correspondiente al 20 de enero de 2022, en el cual se evidencia la deliberación y decisión sobre el nombramiento del señor RM.

Así mismo, solicitó integrar a la presente actuación administrativa la totalidad de los soportes que acompañan el trámite de posesión radicado bajo el N°. 2022019519-000-000, para que obren como pruebas susceptibles de valoración.

Finalmente se debe precisar que mediante comunicación radicada con el número 2022117965-000 del 7 de junio de 2022, Comfinagro presentó los alegatos de conclusión. El escrito desarrolla, en esencia, los argumentos expuestos por la Entidad Vigilada en sus descargos y por lo tanto serán objeto de revisión en conjunto con la respuesta al Pliego de Cargos en el siguiente numeral.

9.3 CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por la Entidad Vigilada de la siguiente manera:

9.3.1 Sobre el cumplimiento de los requisitos de capacitación exigidos para posesionar oficial de cumplimiento y la emergencia sanitaria

Retomando lo indicado en precedencia, Comfinagro manifestó que se presentaron retrasos significativos y diversos inconvenientes para la finalización y certificación en materia de administración de riesgos del candidato elegido para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente, dadas las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, así como el reducido número de personas que componen su nómina para escoger otra persona y la baja oferta de capacitaciones en la materia.

El argumento expuesto por la Entidad Vigilada no logra desvirtuar la imputación efectuada por la SFC en la Formulación de Cargos, en atención a las siguientes razones:

Inicialmente debemos recordar que el artículo 102 y siguientes del EOSF, establecen la obligación de adoptar mecanismos y reglas de conducta que deben observar las Entidades Vigiladas, los administradores y demás funcionarios, y en especial los responsables de la prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con el propósito de evitar que las entidades objeto de supervisión de la SFC, se vean expuestas a la materialización del mismo, en el curso y desarrollo del objeto social para el cual fueron creadas.

Es así como, atendiendo lo anterior, el numeral 3° del artículo 102 del EOSF dispone: “(...) *Para efectos de implantar los mecanismos de control a que se refiere el numeral anterior, las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos, y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos (...)*” (El subrayado es nuestro).

Ahora bien, la SFC instruyó a las Entidades Vigiladas acerca del deber de establecer y asignar facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT a cargo de los órganos de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

dirección, administración y control y, en particular, señaló los requisitos y exigencias mínimas relacionadas con las funciones del Oficial de Cumplimiento Principal y su Suplente para ejercer su cargos de manera efectiva y eficiente.

De esta manera, para la época de los hechos, Comfinagro tenía el deber de asegurar el estricto y oportuno acatamiento de las normas legales e instructivos emanados por la SFC y, en este caso, dar un adecuado alcance a la obligación de gestionar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través de funcionarios debidamente posesionados ante el Comité de Posesiones de la SFC, caso particular del Oficial de Cumplimiento Suplente.

Al respecto, la SFC le recuerda a Comfinagro que el Oficial de Cumplimiento, tanto Principal como Suplente, dentro de la estructura organizacional de las Entidades Vigiladas constituye una valiosa herramienta frente al efectivo control de los lineamientos y parámetros que conforman el SARLAFT pues es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la normativa vigente, implementa controles y monitorea la efectividad de los mismos. Sobre la persona que ocupa este cargo recae la responsabilidad de ejecutar de manera eficiente el sistema, al estar encargado de los canales de denuncia, mapeo de riesgos y ser el máximo garante de la supervisión, difusión, funcionamiento, vigilancia y control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Así, en el caso particular que ocupa la presente actuación administrativa, al Oficial de Cumplimiento Suplente le resulta exigible el mismo grado de preparación y conocimiento que al Principal, en la medida en que tiene la vocación para asumir sus funciones ante las faltas temporales o permanentes de éste.

Ahora bien, dentro del expediente que conforma la presente actuación administrativa, se encuentra acreditado que la Entidad Vigilada no contó con un Oficial de Cumplimiento Suplente debidamente posesionado durante más de 23 meses, reiterando que el periodo se cuenta desde su renuncia l (3 de enero de 2020) hasta la fecha de la Formulación de Cargos dentro de la presente actuación administrativa, esto es, el 20 de diciembre de 2021. Cabe señalar también que, según lo manifestado por la misma entidad en el escrito de descargos del 31 de enero de 2022 *“a la fecha COMFINAGRO no cuenta con Oficial de Cumplimiento Suplente”*. En lo que concierne a la actuación, por cerca de 2 años dicha Entidad Vigilada omitió su deber normativo imputado, como es contar con el Oficial de Cumplimiento Suplente debidamente posesionado.

Comfinagro, ante una ausencia del Oficial de Cumplimiento Principal, en cualquier momento, intempestivamente incluso, habría carecido por completo de un funcionario responsable que atendiera todos los asuntos relativos al SARLAFT exponiendo a la Entidad Vigilada a que no se contara en un momento determinado con el gestor de la debida administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Recordemos que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, suplencia en su primera acepción significa *“acción y efecto de suplir (ponerse en lugar de alguien)”*, mientras que suplir, según el mismo diccionario, quiere decir *“1. Cumplir o integrar lo que falta en una cosa, o remediar la carencia de ella: 2. Ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces (...)”*, de donde se colige que el suplente es la persona llamada a ocupar la posición del titular.

Luego, el cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente es de tal trascendencia en la prevención de actividades delictivas, que la SFC dispuso el mecanismo necesario para evitar que las Entidades Vigiladas no cuenten en un momento dado con una persona que desarrolle sus funciones, en tanto que el objetivo de la figura de la suplencia no es otro que el de reemplazar, justamente, a quien ejerce como titular, en sus faltas temporales y absolutas.

Ahora bien, en cuanto a lo argumentado por Comfinagro sobre la conducta que habría asumido en la designación y trámite de posesión del citado funcionario, conforme a las pruebas aportadas y que obran en el expediente, este Despacho encuentra lo siguiente:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La Entidad Vigilada efectivamente postuló al cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente al señor RM, quien habría asumido su capacitación en materia de riesgos cursando el Diplomado en SARLAFT (Gestión del Riesgo de Lavado de Activos – Formación Oficial de Cumplimiento) en la Universidad del Valle, el cual, por efecto de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, tuvo retrasos significativos y diversos inconvenientes para su finalización y certificación, según indica Comfinagro en sus descargos.

No obstante, lo anterior, se debe precisar que la renuncia del funcionario que ocupaba dicho cargo se presentó el 3 de enero de 2020 y sólo hasta el día 23 de julio de 2021, la Entidad Vigilada radicó por el Aplicativo de Posesiones de la SFC, la primera solicitud de posesión del señor RM como Oficial de Cumplimiento Suplente, según Acta No. 255 del 13 de julio de 2021, radicado con el No. 2021160598-000. Es pertinente aclarar, tal como se expondrá en detalle más adelante, que la Entidad Vigilada insistió en postular nuevamente el mismo candidato (radicada con el No. 2022019519-000 el 31 de enero de 2022).

Así mismo, es pertinente indicar que Comfinagro con su conducta negligente igualmente desconoció la obligación de dar cumplimiento al término dentro del cual debe proveerse el reemplazo del Oficial de Cumplimiento saliente, en el entendido que los órganos sociales encargados de llevar a cabo el nombramiento debieron iniciar el trámite de posesión dentro de un plazo de 45 días corrientes, contados a partir de la fecha de presentación de la renuncia².

El citado periodo de tiempo de carácter perentorio resulta ser suficiente para que el órgano encargado adelante la gestión pertinente a su cargo respecto de la designación y posterior inicio del trámite de posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente, teniendo presente además que, se debía verificar que el candidato postulante cumpliera con todos los requisitos y condiciones exigidos para ocupar dicho cargo, factor temporal que omitió cumplir Comfinagro tal y como aparece demostrado, pues la renuncia fue presentada ante la Junta Directiva el 3 de enero de 2020 y la solicitud inicial de posesión del candidato -que no cumplía con los requisitos- se hizo el 23 de julio de 2021 ante la SFC en desconocimiento del término aludido.

En este sentido, Comfinagro no adelantó una conducta diligente en el tiempo, que le permitiera contar con el Oficial de Cumplimiento Suplente debidamente posesionado, pues transcurrió un año y medio hasta que la Entidad Vigilada radicara la solicitud de posesión antes anotada, la cual fue finalmente rechazada por el Comité de Posesiones como se mencionara de forma subsiguiente, lo cual, resulta evidentemente extemporáneo frente al cumplimiento de su deber, dadas las razones e importancia del cargo antes anotadas.

De otra parte, frente a lo manifestado por la Entidad Vigilada en el sentido de que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la pandemia del Covid 19 dificultaron el proceso de finalización y certificación del candidato a ser postulado como Oficial de Cumplimiento Suplente, es necesario precisar que la Resolución No. 0385 del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria derivada de la mencionada situación y se adoptaron las medidas del caso, fue expedida el 12 de marzo de 2020.

Por lo anterior, no se entiende de qué manera tales medidas podrían eximir de responsabilidad a la Entidad Vigilada, cuando debió verificarse desde el inicio las condiciones académicas y capacidades en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del señor RM³, en lugar de esperar un número significativo de meses para radicar la solicitud de posesión tal y como se mencionó en precedencia. Comfinagro pudo escoger otro candidato que cumpliera con los

² Ver numeral 1.5.1. Renuncias del Capítulo II, Título IV de la Parte Primera - Actuaciones ante la Superintendencia Financiera de Colombia de la Circular Básica Jurídica.

³ Ibidem

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

requisitos mínimos de idoneidad en materia de gestión de riesgos, adelantando una conducta diligente, enfocada a cumplir con las exigencias mínimas del cargo.

Como se advierte, reiteramos que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para afrontar la pandemia no fueron las que originaron las demoras en el nombramiento y solicitud de posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente de la Entidad Vigilada, habida cuenta el tiempo que transcurrió entre la vacancia del cargo y la declaratoria de la emergencia (marzo de 2020), sin que la entidad hubiera realizado gestiones para la selección y postulación de un funcionario que reuniera los requisitos necesarios.

Así mismo, no resulta un eximente de responsabilidad aceptable indicar, como lo hace la Entidad Vigilada, que dado el reducido número de personas que componen su nómina se vio impedida para escoger otra persona y menos aún, la supuesta baja oferta de capacitaciones en la materia, pues se reitera que las Entidades Vigiladas, como expertos operadores del mercado financiero, bursátil y asegurador deben estar atentos a gestionar los riesgos a los que se ven expuestos previendo en todo momento superar las dificultades que podrían en algún momento o circunstancia impedir la correcta gestión en el desarrollo de su objeto social. No se debe olvidar tampoco que las actividades que desarrollan nuestras entidades supervisadas son calificadas como de interés público (artículo 335 de la Constitución Política de Colombia), por lo que el cumplimiento de las normas, tales como las relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo reviste la mayor importancia.

Finalmente, según lo expresa Comfinagro en el escrito de descargos, en su momento se efectuó un seguimiento en los comités de auditoría de noviembre de 2020 y febrero de 2021, sobre la falta de dicha posesión y se informó a la administración sobre los posibles candidatos, con la salvedad de que la oferta de capacitación no cumpliría el mínimo de horas requeridas para la acreditación sobre riesgos. Este hecho resulta relevante como quiera que fue el Comité de Auditoría, en el seguimiento quien que efectuó salvedades y advertencias sobre la ausencia del cargo y su posesión, sin que la Entidad Vigilada adelantara en el menor tiempo posible la búsqueda de la persona que pudiera cumplir con los aspectos mínimos para dar observancia a la norma que ahora se endilga y se sanciona como infringida.

Por lo tanto, los argumentos expuestos por Comfinagro en este acápite no logran desvirtuar la imputación efectuada por la SFC sobre la ausencia de posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente, que se mantiene a efecto de aplicar una sanción pecuniaria de carácter administrativo.

9.3.2 Sobre el deber de las Entidades Vigiladas de evaluar preliminarmente el cumplimiento de los requisitos de los postulantes al cargo de oficial de cumplimiento

Retomando lo indicado en precedencia, Comfinagro manifestó en el escrito de descargos que respecto de los postulantes al cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente, fue difícil cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos básicos exigidos, expresando en particular su desacuerdo sobre el deber que le corresponde a dicha Entidad Vigilada de evaluar antes de la postulación de los candidatos el cumplimiento de los presupuestos en la hoja de vida de los postulantes que les permitan su aprobación por parte del Comité de Posesiones, además de no estar de acuerdo con lo definido por éste sobre la existencia de un potencial conflicto de interés del candidato al cargo de suplente.

El argumento expuesto por Comfinagro, no logra desvirtuar la imputación efectuada por la SFC en la Formulación de Cargos en atención a las siguientes razones:

Inicialmente, la Entidad Vigilada, a pesar de los requisitos fijados para ocupar el citado cargo en el Capítulo IV del Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, postuló a uno de sus funcionarios del área contable como candidato para ser Oficial de Cumplimiento Suplente, quien no cumplía con ellos, aún antes de su postulación, específicamente el correspondiente a la experiencia profesional y conocimiento práctico en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

terrorismo de una Entidad Vigilada, amén de la presencia de un potencial conflicto de interés dadas sus funciones como Contador de la misma entidad, aspectos que desarrollaremos en un acápite puntal posterior.

Debemos ser enfáticos en indicar que la Entidad Vigilada debe adelantar una debida diligencia respecto de la búsqueda y posterior designación de los funcionarios a cargo de las funciones de prevención y gestión del riesgo de LAFT dentro de su organización, teniendo presente la alta responsabilidad que ello conlleva y que exige una conducta de presteza y celeridad que permita lograr la designación y posesión dentro del tiempo prudencial para el mismo, acto que no ocurrió tal y como aparece demostrado dentro del curso de la presente actuación administrativa, pues la Entidad Vigilada, no contó con su Oficial de Cumplimiento suplente desde el 3 de enero de 2020 inclusive y durante 23 meses, por lo menos.

En este sentido, es deber de toda Entidad Vigilada postular al Comité de Posesiones de la SFC a los candidatos que efectivamente cumplan con los supuestos objetivos y subjetivos que les permitan obtener una debida calificación de las condiciones profesionales y personales para ser designados como Oficiales de Cumplimiento, tales como su carácter, responsabilidad, su trayectoria profesional, seriedad, moralidad e idoneidad para administrar los riesgos a los que se ven expuestas como ocurre con el de LAFT.

De acuerdo con las pruebas obrantes dentro de la presente actuación administrativa, así como todos los antecedentes citados en el acto de formulación de cargos⁴, se tiene que:

i) Mediante memorando radicado con el No. 2021070681-005 del 5 de mayo de 2021, la Dirección de Intermediarios de Valores de la SFC, indicó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que la Revisoría Fiscal de la Entidad Vigilada remitió información relacionada con ausencia de posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente.

ii) El Director Legal de Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (E), con requerimiento radicado con el No.2021131060-001 del 15 de junio de 2021, le solicitó a la Entidad Vigilada informar las gestiones adelantadas, tendientes a la designación y posterior trámite de posesión del Oficial de Cumplimiento, así como los motivos por los cuales no habría dado cumplimiento a esa obligación.

iii) Comfinagro S.A mediante comunicación radicada con el No. 2021131060-003 del 29 de junio de 2021, dio respuesta al citado requerimiento, así:

“(…) Sobre el particular, señálese en primer lugar que Comfinagro S.A. es una compañía con una nómina reducida, compuesta por doce (12) trabajadores, lo que limita sustancialmente los posibles candidatos a la suplencia mencionada, pues éstos deben estar vinculados, ser profesionales y no pertenecer ni a áreas de control ni a aquellas directamente relacionadas con las actividades previstas en el objeto social. En virtud de ello, el único posible candidato es, actualmente, el señor Rafael Manrique, contador de la sociedad.

Aunado a lo anterior, la oferta de capacitación sobre administración de riesgos ha sido usualmente muy poca, sobre todo en la ciudad de Cali, y la oferta entre marzo y octubre de 2020, aproximadamente, fue virtual por efectos de la emergencia sanitaria, y ninguna cumplía el requisito de mínimo 150 horas.

“(…) No obstante, se informa que a la fecha el señor Rafael Manrique se encuentra cursando Diplomado en Sarlaft (Gestión del Riesgo de Lavado de Activos – Formación Oficial de Cumplimiento) en la Universidad del Valle, lo cual soportamos con la Factura EFUV-1514 de mayo 20 de 2021 adjunta a esta respuesta, para efectos de que, una vez terminado

⁴ Ver numerales 1.1 a 1.12 del oficio de formulación de cargos radicado con el No. 2021131060-013 del 20 de diciembre de 2021.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

satisfactoriamente, pueda postularse en debida forma para ocupar la suplencia del Oficial de Cumplimiento.

iv) Ante la solicitud de información sobre el estado del cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente de la Entidad Vigilada⁵ el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Registro⁶, manifestó que una vez verificada la base de datos y el Aplicativo de Posesiones figuraba la siguiente información:

Nombre oficial de Cumplimiento Suplente	Novedad
CLAUDIA MARCELA NUÑEZ VELASQUEZ	Vigente desde el 4 de enero de 2018- Vigente
	El día 23 de julio de 2021, la entidad radicó por el Aplicativo de Posesiones la solicitud de posesión del señor RM ⁷ como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE, según Acta No. 255 del 13 de julio de 2021.R-2021160598-00.
	NEGADA en el Comité de Posesiones del día 26 de agosto de 2021 R- 2021160598- 009.
	Interpone RECURSO con comunicación R-2021160598-17 del 29 de octubre de 2021

De acuerdo con la evidencia revisada, no es de recibo el argumento de que no existió negligencia o mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Vigilada cuando las pruebas que obran en el expediente demuestran, por el contrario, que sus gestiones fueron tardías e insuficientes para tal efecto.

Así, la respuesta dada por Comfinagro radicada con el No. 2022019674 -000 del 31 de enero de 2022, da cuenta de la falta de interés por conseguir una persona que cumpla con lo exigido en la norma, amparada en una “nómina reducida” y en los requisitos exigidos para quien debe ostentar la calidad de Oficial de Cumplimiento. Agrega que no tenía a nadie preparado y que por lo tanto decidió capacitar a un funcionario. Estos argumentos no pueden admitirse frente a la designación de una persona para un cargo tan relevante. Por el contrario, denota desdén y falta de compromiso con la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

No puede ser que una Entidad Vigilada, autorizada para prestar una actividad de interés público exprese como justificante de su omisión que no cuenta con la estructura humana suficiente y exigida para el cumplimiento de su objeto social. Los requisitos de la norma no son caprichosos y no pueden ser la excusa para argüir dificultad en su cumplimiento. La SFC tampoco encuentra razonable que la prevención del riesgo tenga que esperar a que la persona escogida se capacite. Una ausencia del Oficial de Cumplimiento Principal puede ocurrir en cualquier momento y no puede ser que no hay un suplente porque no ha culminado la capacitación.

Por lo tanto, reiteramos que es deber permanente de cada entidad adelantar dentro de los términos exigidos y bajo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos descritos en las normas, la

⁵ Memorando interno radicado con el No. 2021131060-011 del 29 de octubre de 2021.

⁶ Memorando radicado con el No. 2021131060-012 del 10 de noviembre de 2021.

⁷ Ibidem

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

posesión de los Oficiales de Cumplimiento, con el propósito de no causar traumatismos significativos a la entidad y al sistema financiero en general.

En efecto sobre la decisión del Comité de Posesiones respecto de la existencia de un potencial conflicto de interés del postulante al cargo de oficial de cumplimiento por ser el candidato, a su vez, responsable de un proceso como el contable, se debe precisar lo siguiente:

La atribución de verificación del cumplimiento, tanto de tipo objetivo como subjetivo a cargo del Comité de Posesiones, relativa a la calificación de las calidades propias de cada postulado a un cargo del cual se requiere posesión, conlleva el examen especialísimo de sus condiciones personales y particulares, dentro de las cuales se encuentra la evaluación del rol que se desempeña al interior de la Entidad Vigilada que lo postula y su compatibilidad con la investidura para la cual es presentado ante el Comité de Posesiones de esta Superintendencia.

Comfinagro no fue diligente en la designación y posterior radicación del trámite de posesión de un funcionario designado, por cuanto se radicaron dos trámites de posesión de la misma persona en dos épocas diferentes, respecto de los cuales la SFC se pronunció con idénticas consideraciones, mediante las comunicaciones radicadas con los Nos. 2021160598-00 de 21 julio de 2021 y 2022019519-000 de enero 31 de 2022, en las cuales se puso de presente la misma respuesta final: *“negar la posesión al advertir que el candidato no acredita el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el sub numeral 4.2.4.3.1 del Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la CBJ, para el ejercicio del cargo para el cual es postulado”*.

En tal sentido, conviene reiterar que las Entidades Vigiladas deben atender el propósito señalado en las normas vigentes para efectos de conceder la posesión de los funcionarios respectivos, lo que supone el cumplimiento de los dos tipos de requisitos a saber:

(i) Los primeros de orden objetivo, referidos a la inexistencia de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos 75 a 78 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y a los descritos en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica demás normas aplicables; (ii) Los segundos, de orden subjetivo, en los cuales se aplica un criterio de apreciación que es discrecional, proveniente del resultado de la evaluación integral y particular de la personalidad del postulado, de la cual hacen parte su formación académica, el carácter de su responsabilidad, su experiencia profesional, su solvencia moral y datos relevantes de su comportamiento social, aspecto este último que guarda estrecha relación con la atención de los negocios privados y las obligaciones crediticias. Por lo anterior, la atribución de tipo subjetivo de la Superintendencia, relativa a la calificación de dichas calidades de cada postulante a un cargo del cual se requiere posesión, conlleva el examen propio y particular exhaustivo de sus condiciones profesionales y personales en la que este se encuentra.

Como ha quedado expuesto, se trata de una competencia discrecional pero no por ello arbitraria, sino que debe ser adecuada, razonable y proporcional, la cual debe plasmarse en un acto administrativo motivado para así garantizar el derecho de defensa y el debido proceso del postulante. Bajo tal contexto, se reitera que el cumplimiento de los requisitos exigidos para autorizar una posesión por parte del Comité de Posesiones de esta Superintendencia, no se satisface con la sola acreditación de los aspectos de carácter reglado, es decir, con reunir en forma completa los requerimientos de tipo objetivo, entendiendo por éstos, la entrega de documentos, inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades, suministro de información y diligenciamiento de formatos previstos para el efecto, pues ellos no agotan por sí mismos todos los requerimientos legales para obtener un pronunciamiento favorable respecto de la posesión.

Vale la pena retomar lo resuelto por el Comité de Posesiones en cuanto a los trámites radicados por Comfinagro ante la SFC, lo cual indica la falta de previsión de dicha Entidad Vigilada al momento de designar y radicar la información soporte con el cumplimiento de los requisitos exigidos para la posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente, así:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En cuanto al primer trámite de posesión radicado por Comfinagro con el No.2021160598- 009 del 6 de octubre de 2021, el Comité de Posesiones manifestó lo siguiente:

“(…) Evaluada la hoja de vida y demás documentos que reposan en la carpeta de solicitud, el Comité de Posesiones determinó negar la posesión por considerar que la persona postulada no acredita el conocimiento y la experiencia profesional necesaria y suficiente en temas de administración de riesgos, particularmente en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, elementos esenciales para el ejercicio idóneo y responsable de las funciones propias de los oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, en tanto conlleva al conocimiento teórico y práctico respecto a las actividades autorizadas a dichas entidades y a los riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus operaciones.

Debe tenerse en cuenta entonces que el conocimiento exigido en la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia (Numeral 4.2.4.3.1.3. de la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Externa 029 de 2014), no emana únicamente de los estudios que se hayan o se estén realizando en administración de riesgos, por cuanto ello abarca únicamente un componente teórico de los asuntos correspondientes, sino que requiere adicionalmente que se hayan adquirido conocimientos prácticos que permitan garantizar que al momento de ejercerse las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Oficial de Cumplimiento, dicho ejercicio se materializará en condiciones de idoneidad, seguridad y profesionalidad.

Adicionalmente, observa el Comité de Posesiones que el postulado ejerce como Jefe de Contaduría de la comisionista desde el 26 de abril de 2018, cargo desde el cual en atención a las funciones que tiene bajo su responsabilidad podría presentar conflictos relativos a la objetividad que requiere el desarrollo del cargo, en contravía con lo establecido en el numeral “4.2.4.3.1.5. Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la CBJ, el cual dispone: “4.2.4.3.1.5. No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas en el objeto social principal”. (el resaltado es nuestro).

Además, estas consideraciones fueron reiteradas por el mismo Comité de Posesiones con ocasión del recurso de reposición interpuesto en esa oportunidad⁸ y que fue resuelto por el Secretario de dicho Órgano Colegiado⁹, el que decidió:

“(…) CONFIRMAR la decisión adoptada por el Comité de Posesiones en la sesión del 26 de agosto del año 2021, mediante la cual esta Superintendencia negó la posesión de señor Rafael Hernando Manrique Jiménez como Oficial de Cumplimiento Suplente de la Sociedad Comisionista de Bolsa Agropecuaria COMFINAGRO S.A.

De la misma manera, se presentó una nueva radicación de solicitud de posesión con el mismo candidato, tal y como aparece, luego de verificar las pruebas aportadas por Comfinagro, como son las siguientes:

1. Captura de pantalla de inicio de trámite, bajo radicación N° 2022019519-000-000, de enero 31 de 2022, correspondiente a la postulación del señor RM como oficial de cumplimiento suplente, conforme a su ratificación en sesión de Junta Directiva del pasado 20 de enero de los corrientes.
2. Extracto de acta de la sesión de la Junta Directiva N° 261, correspondiente al 20 de enero de 2022, en el cual se evidencia la deliberación y decisión sobre el nombramiento del señor RM.
- 3 La totalidad de los soportes que acompañan el trámite de posesión radicado bajo el N° 2022019519-000.

⁸ Oficio radicado con el No. 2021160598-017 del 15 de octubre del 2021.

⁹ Oficio radicado con el No. 2021160598-019 del 24 de diciembre del 2021.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con comunicación No. 2022019519-000 del 31 de enero de 2022, se radicó nuevamente la hoja de vida del señor RM¹⁰ para iniciar el trámite de posesión al cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente.

Mediante requerimiento radicado con el No.2022019519-001-000 del 16 de febrero de 2022, el Comité de Posesiones le solicitó información complementaria a la Entidad Vigilada, recordándole el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe cumplir el Oficial de Cumplimiento, indicándole además que debería remitir su organigrama del cual se desprenda el nivel jerárquico del postulante y la relación de subordinación y dependencia, con el cargo que en la actualidad se encontraba desempeñando, incluido. Con el trámite derivado con el 005 del 21 de febrero del 2022, Comfinagro allegó la información solicitada.

Ahora bien, el Comité de Posesiones informó a la Entidad Vigilada la negativa impartida a la solicitud de posesión del señor RM¹¹ a quién le señaló, entre otras cosas, que:

“Evaluada la hoja de vida y demás documentos que reposan en la carpeta de solicitud, el Comité de Posesiones determinó negar la posesión al advertir que el candidato no acredita el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el sub numeral 4.2.4.3.1 del Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la CBJ, para el ejercicio del cargo para el cual es postulado.

“En efecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en los sub numerales 4.2.4.3.1.3 y 4.2.4.3.1.5 del referido acápite de la CBJ, las personas designadas para ocupar los cargos de oficiales de cumplimiento principal y suplente deben, entre otros asuntos, “Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas (...)” y “Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos”. Así las cosas, a partir de la información reportada en la hoja de vida y en la documentación allegada, no se observa que la formación académica del candidato incluya, como mínimo ciento cincuenta (150) horas en materia de administración del riesgo de LA/FT, así como tampoco una experiencia profesional de mínimo veinticuatro (24) meses, asociada a la gestión y administración de riesgos, en la medida que los cargos ocupados se relacionan principalmente con asuntos contables y de auditoría. En ese orden, no acredita el conocimiento y la experiencia profesional necesarios y suficientes para el ejercicio idóneo y responsable de las funciones propias de los oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

“Adicionalmente, y como fue advertido en oportunidades anteriores, el candidato se desempeña como Jefe de Contabilidad de la sociedad comisionista desde el 26 de abril de 2018, cargo desde el cual en atención a las funciones que tiene bajo su responsabilidad podría presentar conflictos relativos a la objetividad que requiere el desarrollo del cargo, en contravía con lo establecido en el numeral 4.2.4.3.1.5. Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la CBJ, el cual dispone: “4.2.4.3.1.5. No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas en el objeto social principal”.

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la reiterada negativa emitida por el Comité de Posesiones frente a la postulación del señor R.M¹². se fundamenta en que no acredita el conocimiento y la experiencia profesional necesaria y suficiente en temas de administración de riesgos, particularmente en el de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como la presencia de un conflicto de interés dadas sus funciones dentro de la misma Entidad Vigilada.

En ese orden de ideas resulta de especial importancia exponer que la experiencia laboral de quien pretende ostentar la condición de Oficial de Cumplimiento Principal o Suplente de una entidad vigilada

¹⁰ Ibidem

¹¹ Oficios radicados con los números 2022019519-008 y 2022019519-010 del 5 de abril de 2022. La negativa se fundamenta en el no cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad SARLFT vigente para la época de los hechos.

¹² Ibidem

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

debe permitir evidenciar que cuenta con los conocimientos que garanticen que, al momento de ejercer las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, dicho ejercicio se materializará en condiciones de idoneidad, seguridad y profesionalidad.

De otro lado, en lo que se refiere a su desempeño como contador de Comfinagro, para la época de los hechos, el Comité de Posesiones de la SFC, consideró relevante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en Sentencia C-645 del 13 de agosto del 2002, donde hizo referencia a las funciones del contador público, en los siguientes términos:

“Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, el Contador Público colabora y asesora al particular en el cumplimiento de sus obligaciones contables y tributarias. En relación con este aspecto de la profesión, y teniendo en cuenta que algunos particulares -en especial los comerciantes- tienen el deber de llevar un registro pormenorizado de sus actividades y una relación fiable de su estados financieros, constituye función primordial de los contadores públicos la de coordinar y asesorar a los mismos en el cumplimiento adecuado de dichos compromisos, pues ello es requisito fundamental para el manejo regular de los negocios y para la seguridad y efectividad de las relaciones jurídicas que surjan con ocasión de los mismos.

“Como quiera que la situación individual de los particulares repercute en ámbitos externos que involucran el interés público, es función también del Contador Público garantizar la veracidad de la información relacionada con el patrimonio de dichos particulares, que pueda ser requerida y utilizada por el Estado o por terceros en el giro ordinario de sus negocios”.

Así las cosas, el Comité de Posesiones de la SFC, consideró en su momento que, sin lugar a dudas, el contador hace parte de las áreas directamente relacionadas con las actividades propias del objeto social de la Entidad Vigilada, como quiera que debe velar porque los estados financieros contengan el registro fiable de los hechos económicos del ente social.

En consecuencia, determinó que quien ostente la calidad de contador en una Entidad Vigilada se encuentra inmerso en la prohibición prevista en el numeral 4.2.4.3.1.5. Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, fundamento normativo de la negativa proferida por el Comité de Posesiones frente a su solicitud de posesión como Oficial de Cumplimiento Suplente de Comfinagro.

Adicionalmente, el Comité de Posesiones señaló que el conocimiento y la experticia no se predica exclusivamente de los estudios que se hayan o se estén realizando en administración de riesgos, sino que requiere adicionalmente los conocimientos prácticos que permitan garantizar que al momento de ejercerse las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Oficial de Cumplimiento.

Finalmente, es pertinente poner de presente que la Entidad Vigilada debió revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos pues la evaluación integral y particular de la personalidad del postulado, de la cual hacen parte su formación académica, el carácter de su responsabilidad, su experiencia profesional, y demás aspectos pueden y deben ser verificados por las Entidades Vigiladas frente a la hoja de vida de sus postulados a ocupar los cargos de rigor. Por las razones expuestas, no es de recibo el argumento de que dicha labor no puede estar a cargo de éstas, pues, como profesionales del mercado financiero y de valores deben adelantar las gestiones pertinentes para integrar al área de cumplimiento de la entidad con las personas con capacidad e idoneidad necesarias para cubrir debidamente dichas vacantes, más aún en materia de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Así las cosas, los argumentos expuestos por la Entidad Vigilada no logran enervar el cargo imputado.

CONCLUSIÓN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Conforme a todo lo expuesto, este Despacho concluye que, contrario a lo solicitado por el libelista, es procedente imponer una sanción pecuniaria a Comfinagro, por las razones expuestas a lo largo del presente acto administrativo, previas las siguientes consideraciones finales.

DÉCIMO: GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

En ejercicio de las facultades legales y, en especial, de las que le confieren los artículos 49, el literal s) y x) del artículo 50, en concordancia con lo previsto por los artículos 51 a 55 por remisión del artículo 22 de la Ley 964 de 2005, así como de lo dispuesto por los artículos 102 numerales 1 y 2, y numeral 4 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con lo previsto en el artículo 11.2.1.4.29 del Decreto 2555 de 2010, esta entidad aplicará una medida administrativa de carácter sancionatorio.

Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 964 de 2005, quien incurra en cualquiera de las infracciones descritas en el artículo 50 de la citada ley estará sujeto a una o algunas de las siguientes sanciones, que serán impuestas por la Superintendencia de Valores hoy SFC, así “(...) *b) Multa a favor del Tesoro Nacional*”.

Así mismo, el artículo 55 de la misma ley 964 de 2005 determina lo siguiente “(...) *Límites a la imposición de multas. En el caso de sanciones institucionales la Superintendencia de Valores podrá imponer multas por cada infracción hasta por el equivalente a lo señalado en el literal b) del numeral 3 del artículo 208 o el numeral 3 del artículo 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, según corresponda*”.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 211 del EOSF dispone: “*Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos (\$1.742.000.000) de 2002*”.

En este orden de ideas, y con el propósito de graduar el monto de la sanción dentro de la presente actuación administrativa, deben ser considerados los criterios establecidos en el artículo 52 de la Ley 964 de 2015, de la siguiente manera:

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones;

Comfinagro desde que se encuentra sometida a la vigilancia de la SFC, no ha sido objeto de sanción por hechos similares al que fue expuesto en el Pliego de Cargos.

b) La resistencia, negativa u obstrucción frente a la acción investigadora o sancionatoria de la Superintendencia de Valores hoy SFC.

De acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, no hay evidencia de que la Entidad Vigilada hubiera presentado resistencia negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Superintendencia.

c) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Valores hoy SFC.

Cabe resaltar que Comfinagro no ha sido renuente a cumplir con las órdenes e instrucciones impartidas por esta Superintendencia.

d) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de esta conducta por interpuesta persona, así como ocultar la comisión de la misma o encubrir sus efectos;

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sobre el particular, no se comprobó por parte de esta Superintendencia que se hubiesen utilizado medios fraudulentos en la comisión de la infracción o recurrido a persona interpuesta para ocultar o encubrir sus efectos.

e) El que la comisión de la infracción pudiera derivar en un lucro o aprovechamiento indebido, para sí o para un tercero;

No se comprobó por parte de esta Superintendencia que con la infracción cometida, Comfinagro obtuviera algún beneficio económico.

f) El que la comisión de la infracción se realice por medio con la participación o en beneficio de personas sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores hoy SFC, personas que realicen las actividades señaladas en el artículo 3 de la presente ley o sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy SFC) de quienes las controlen o de sus subordinadas;

No se comprobó, por parte de esta Superintendencia, que Comfinagro cometiera la infracción objeto de sanción bajo los supuestos descritos en el literal anterior.

g) La dimension del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por las normas del mercado de valores;

Debemos indicar que la actividad financiera y bursátil no es igual a las demás actividades que realizan los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución Política, que califica dichas actividades como de “*interés público*”, motivo por el cual se orienta a la búsqueda del bienestar general. Así mismo, la citada disposición constitucional restringe el acceso a la prestación de los servicios financieros, en la medida en que exige la autorización previa del Estado para su ejercicio y el cabal cumplimiento de las instrucciones para el ejercicio y desarrollo de sus actividades objeto social en condiciones de transparencia y seguridad en la gestión de los riesgos frente al mercado y al público en general. Esta limitación tiene como fundamento el alto riesgo social que implica esta actividad y la consecuente necesidad de asegurar la confianza pública en el servicio

Adicionalmente, la noción de *orden público* permite, por una parte, imponer la realización de los principios superiores de un Estado Social, destinados a velar por la conservación y vigencia no sólo de las libertades individuales de los ciudadanos, sino también de los derechos sociales o prestacionales de todas las personas y, por otra parte, conlleva al reconocimiento de un Estado interventor, quien fundado en principios de equidad, regula imperativamente las relaciones entre los particulares en protección del interés público, con el propósito de alcanzar un pleno desarrollo económico ligado al logro efectivo de una justicia social, como ocurre con las normas de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

No puede desconocerse que el ingreso de dineros ilícitos en una Entidad Vigilada afecta notoriamente el sistema, no sólo por los sentimientos de desconfianza e inseguridad que generan en los clientes y usuarios del sistema, o el desprestigio reputacional que puede sufrir la entidad y adicionalmente a sus representantes quienes se hacen acreedores a las sanciones penales correspondientes, sino por la enorme puerta que se abre a los criminales, para que operen libremente en los circuitos financieros del mundo.

La SFC pudo determinar, en el curso de la presente actuación administrativa, que la conducta negligente en que incurrió la Entidad Vigilada representó un peligro a los intereses jurídicos tutelados, toda vez que Comfinagro, al no contar con el Oficial de Cumplimiento Suplente debidamente posesionado ante la SFC, estuvo expuesta al riesgo de ser utilizada para el Lavado de Activos y la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Financiación del Terrorismo, poniendo en peligro los intereses jurídicos tutelados por esta Superintendencia. Esta omisión resulta de la mayor gravedad frente al cumplimiento de las medidas de prevención de la materialización del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo pues la desatención del cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente durante un largo periodo de tiempo generó que ante cualquier falta del principal, la Entidad Vigilada quedará a la deriva frente a la prevención de este riesgo.

De esta manera, Comfinagro tenía para la época de los hechos el deber de asegurar el estricto y oportuno acatamiento de las normas legales e instructivos emanados por la SFC y, en este caso, dar un adecuado alcance a la obligación de gestionar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través de funcionarios debidamente posesionados ante el Comité de Posesiones de la SFC, caso particular del Oficial de Cumplimiento Suplente.

h) El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes;

La conducta de la investigada no se ajusta a la carga de diligencia, cuidado y profesionalidad propias de las Entidades Vigiladas por la SFC en materia de prevención y control del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, actividad social que –se insiste- es regulada pues importa al Estado, ya que compromete el orden público económico y la confianza depositada en el sistema.

Sobre este criterio debe señalarse que, aunque Comfinagro hubiera propendido porque se cumplieran las normas relativas al SARLAFT, lo cierto es que para el período cuestionado, como está demostrado en la presente actuación administrativa, no cumplió con su deber en relación con la posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente; falencia existente durante el período objeto del cargo formulado, obrando de manera negligente e imprudente frente a la correcta gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, pues aún para la fecha de radicación de los descargos no contaba con el Oficial de Cumplimiento Suplente debidamente posesionado ante la SFC.

La omisión en la que incurrió permitió que la Entidad Vigilada se viera expuesta a la potencialidad de materializar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el desarrollo de sus actividades con un alto grado de imprudencia y poca diligencia en la atención de sus deberes y en la plena observancia de las normas pertinentes en materia de debida gestión del citado riesgo.

En este sentido, dentro de la presente actuación administrativa quedó plenamente demostrado que la Entidad Vigilada no adelantó los trámites necesarios para poder obtener la debida posesión del funcionario designado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Suplente, pues no aparece probado que desplegara una conducta activa en pro de alcanzar dicho objetivo con la debida atención, prudencia y cuidado.

Como atenuante al momento de establecer el monto de la sanción se tendrá en cuenta el siguiente literal, así:

i) La oportunidad en el reconocimiento o aceptación expresas que haga el investigado sobre la comisión de la infracción.

Debemos mencionar que Confinagro indicó en el escrito de explicaciones que, acogiendo lo dispuesto en el literal i) del numeral 2º del artículo 208 del EOSF, reconoce expresamente la configuración de la conducta consistente en la no posesión de Oficial de Cumplimiento Suplente y solicita tenerlo en cuenta al momento en el cual se gradúe la sanción; adicionalmente, expresa que en su concepto no se presentó daño alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con fundamento en lo anterior esta Superintendencia atenderá la solicitud de la Entidad Vigilada y tomará en cuenta lo manifestado por la misma como atenuante de la conducta infractora sancionable, únicamente sobre el reconocimiento que efectúa Comfinagro sobre la existencia del hecho infractor como es, precisamente, la no posesión del Oficial de Cumplimiento Suplente.

No obstante, frente a la supuesta ausencia de daño, debemos precisar que, tal y como se expuso en los literales g) y h), sí se evidenció la presencia de la afectación de los intereses tutelados por la SFC, así como imprudencia y falta de diligencia en la atención de los deberes exigibles en materia del SARLAFT, aspectos sobre los cuales ya se manifestó esta entidad en los citados literales.

Por lo tanto, en consideración a lo expuesto, se estima procedente imponer a COMFINAGRO la sanción que se indica en la parte resolutive del presente acto administrativo, teniendo en cuenta los criterios antes citados:

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - SANCIONAR CON MULTA a la Sociedad Comisionistas Financieros Agropecuarios S. A. Comfinagro con NIT 805023598-1, por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.00) M/CTE por el cargo único endilgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la multa que mediante esta Resolución se impone se debe efectuar teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de cualquiera de los dos (2) canales habilitados para el efecto:

1. Cuenta de depósito en el Banco de la República, transferencia a través del servicio SEBRA - CUD, indicación:

Entidad financiera	Banco de la República
Nit:	860005216-7
Tipo de traslado	Traslado SEBRA – CUD
N° de cuenta.	61012027
Denominación:	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES
Código de portafolio	365 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Código de operación	137

Si se utiliza este medio, adicionalmente se debe informar el pago al Grupo de Flujo de Caja de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, remitiendo el soporte respectivo.

2. Transacción PSE; página web del Banco Agrario de Colombia, Punto virtual pagos electrónicos / categorías / pagos DTN, indicación:

Entidad financiera	Banco Agrario
--------------------	---------------

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

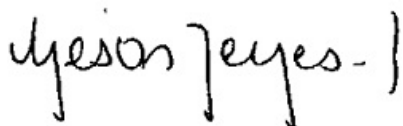
N° de cuenta.	300700011459
Nombre de la cuenta	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES
Código de portafolio	365 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de la ejecutoria de la presente Resolución. En caso de no realizarse el pago en ese día, desde esa fecha y hasta el día de su cancelación se causará un interés equivalente a una y media veces (1.5) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período sobre el valor insoluto de la sanción. La consignación deberá acreditarse ante la Subdirección Financiera de esta entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoria.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente al Representante legal de Comfinagro o a quien haga sus veces, el texto de la presente Resolución, entregándole copia íntegra de la misma y haciéndole saber que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Financiero de Colombia, el cual se debe interponer personalmente y por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acto administrativo se notificará a través de medios electrónicos, en el entendido que la Entidad Vigilada emitió autorización para efectuar dicha notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CESAR OCTAVIO REYES ACEVEDO

540000-DELEGADO PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Elaboró:

ARIEL FERNANDO SOLARTE CASTRO

Revisó y aprobó:

CESAR OCTAVIO REYES ACEVEDO